



San Andrés, Isla, Veintiuno (21) de Julio de Dos Mil Veinte (2020)

**RADICACIÓN:** 88-001-4003-003-2020-00083-00  
**REFERENCIA:** ACCIÓN DE TUTELA  
**TUTELANTE:** JOHN ALBERTO HUMPHRIES BERRIO  
**TUTELADO:** JUAN CARLOS BONILLA DAVIS Y  
JOANIS MCNISH MUÑOZ

### **SENTENCIA No. 053-020**

#### **1. OBJETO**

Procede el Despacho a decidir la acción de tutela instaurada por el señor JOHN ALBERTO HUMPHRIES BERRIO actuando en nombre propio en contra de JUAN CARLOS BONILLA DAVIS y JOANIS MCNISH MUÑOZ, miembros de la Junta Directiva de CAJASAI.

#### **2. ANTECEDENTES**

El señor JOHN ALBERTO HUMPHRIES BERRIO actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela por razón de los hechos que a continuación se sintetizan:

Expresa el accionante que el día 16 de junio de 2020 hizo llegar escrito a los funcionarios, a los correos electrónicos de los accionados, con solicitudes puntuales sobre remisión de actas del Consejo, indicando que recibía notificaciones en su correo electrónico.

Sostiene que la petición fue avalada por tres consejeros más.

Indica que ha transcurrido el término previsto en el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

Manifiesta que con la omisión de los accionados se está vulnerando su derecho fundamental de petición.

#### **3. PRETENSIONES**

Con fundamento en los anteriores hechos, el señor JOHN ALBERTO HUMPHRIES BERRIO actuando en nombre propio solicita:

- 3.1. Que se tutele el derecho fundamental de petición.

#### **4. ACTUACIÓN JUDICIAL**

Mediante Auto N° 0246-020 de fecha nueve (09) de julio de dos veinte (2020), se admitió la presente acción de tutela, ordenándose comunicarles a los señores JUAN CARLOS BONILLA DAVIS Y JOANIS MCNISH MUÑOZ, con el fin de que contestara la presente solicitud y rindiera los informes del caso dentro del término de dos (2) días, de la presente acción.

## **5.- CONTESTACIÓN A LA ACCIÓN DE TUTELA**

Los accionados contestaron la presente acción constitucional dentro del término legal concedido por este Despacho, en la cual manifiesta que el accionante solicitó que se le hiciera entrega de las actas No. 03 y 04 de la Junta Directiva del año 2020.

Sostienen que el accionante solicitó que se le hiciera entrega de todas las citaciones enviadas al Consejo Directivo para sesionar en el año 2020.

Indica que la petición fue recibida el día 16 de junio de 2020.

Aducen que el Decreto 491 de 2020, estableció en su artículo 5°, la ampliación de términos para atender las peticiones, donde por ejemplo las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los 20 días siguientes a su recepción.

Manifiesta que la petición del accionante fue presentada durante la vigencia de la Emergencia económica, social y ecológica, razón por la que el término para dar respuesta a la misma es de veinte (20) días.

Finalmente, explica que en ese sentido la respuesta al accionante vencería el día 16 de julio de 2020.

## **6.- CONSIDERACIONES**

### **6.1. COMPETENCIA:**

De conformidad con el numeral 1° del Art. 1° del Decreto 1983 del 2017, éste Despacho es competente para conocer la presente solicitud de tutela.

La norma citada, respecto *del reparto de la acción de tutela*, dispone lo siguiente:

*“(…) Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital, municipal y contra particulares, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a los jueces municipales”.* Lo anterior por ser los tutelados los directivos del consejo directivo de la Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencia.

Frente a la competencia, según el criterio del lugar donde se haya producido el hecho o sus efectos, los mismos tuvieron ocurrencia en la Isla de San Andrés.

Así las cosas, son los Juzgados Municipales del Distrito Judicial de San Andrés, los competentes para conocer la presente solicitud de tutela, según el correspondiente reparto.

## **6.2. PROCEDENCIA:**

El Artículo 86 de la Constitución Política de 1991, desarrollado en los Decretos 2591 y 306, ambos del mismo año, ha institucionalizado la acción de tutela como una garantía y un mecanismo constitucional de protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y de los particulares, en los casos que establezca la ley.

Dicha acción muestra por su finalidad un carácter extraordinario, en la medida en que su utilización parte del respeto y garantía a la consagración constitucional y legal de las jurisdicciones ordinarias y especiales, así como de las respectivas acciones, procedimientos, instancias y recursos que ante las mismas se surten, lo que supone un uso en forma supletiva con carácter subsidiario; de manera que, la procedencia de la tutela se restringe a la inexistencia de otros medios de defensa judicial o a la ineficacia de los mismos, como también a su utilización transitoria ante la presencia de un perjuicio irremediable que permita contrarrestar dicho efecto en forma temporal, con una operancia inmediata, urgente, rápida y eficaz, mediante el trámite de un procedimiento preferente y sumario, hasta tanto la autoridad correspondiente defina el fondo del asunto.

En el presente asunto, se trata del ejercicio de la Acción de Tutela incoada contra de los directivos del consejo directivo de la Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencia, por tanto es procedente, al tenor de los Artículos 5º y 42 Numeral 2º del Decreto 2591 de 1991.

## **6.3. PROBLEMA JURÍDICO**

Corresponde al Despacho determinar, si se ha vulnerado y/o amenazado o no el derecho fundamental de petición del señor JOHN ALBERTO HUMPHRIES BERRIO por parte de los señores JUAN CARLOS BONILLA DAVIS Y JOANIS MCNISH MUÑOZ, como directivos de la Caja de Compensación Familiar CAJASAI, al no haber dado respuesta a su petición de fecha 16 de junio de 2020.

## **6.4. ANÁLISIS NORMATIVO Y/O JURISPRUDENCIAL DE LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS O AMENAZADOS**

### **6.4.1. DERECHO DE PETICIÓN**

De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por

motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución. Asimismo, esa norma estableció que el legislador podría reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

La Ley 1755 del 30 de junio de 2015, es la nueva normatividad que regula el derecho de petición, estableciendo las siguientes reglas, y sustituyendo las disposiciones legales anteriores, previstas en la Ley 1437 de 2011:

**“ARTÍCULO 13. OBJETO Y MODALIDAD ES DEL DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES.** *Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.*

*Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos”.*

*Sobre lo anterior, La Corte Constitucional, en sentencia T-369/13 del 27 de junio de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos, ha establecido los presupuestos mínimos que determinan el ámbito de protección constitucional y ha definido sus rasgos distintivos en los siguientes términos:*

*“(i) Se trata de un derecho fundamental, el cual a su vez es determinante para la efectividad de otros derechos fundamentales tales como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión;*

*(ii) Este derecho se ejerce mediante la presentación de solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas y a los particulares;*

*(iii) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión planteada por el peticionario;*

*(iv) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: a) debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa, oportuna y acorde con lo solicitado; y b) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.*

*(v) La respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; por regla general, se acude al artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del*

*término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.*

*(...)*

*Se concluye entonces, que el derecho de petición consagra de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y de otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. La jurisprudencia constitucional también ha resaltado que la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema, así, se requiere “una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses”. (Negrilla del Despacho).*

Al respecto, en sentencia T-138 del 2017 Luis Guillermo Guerrero Pérez, la H. Corte expresó:

*“El derecho de petición está consagrado en el artículo 23 del Texto Superior como una garantía fundamental de las personas que otorga escenarios de diálogo y participación con el poder público y que posibilita la satisfacción de otros derechos constitucionales en el marco del Estado social de derecho. Su núcleo esencial se encuentra en la posibilidad de presentar solicitudes de manera respetuosa ante las autoridades públicas o ante los particulares en los casos previstos en la ley, surgiendo a cargo de sus destinatarios el deber de recibirlas, tramitarlas y resolverlas de forma clara, oportuna, suficiente y congruente con lo pedido.*

*En relación con lo expuesto y con énfasis en la obligación de tramitar y resolver las peticiones, esta Corporación ha señalado que la respuesta que se brinde debe cumplir, por lo menos, con los siguientes requisitos: (i) debe ser concedida de manera pronta y oportuna dentro del término legal; (ii) su contenido debe dar una solución de fondo y acorde con las cargas de claridad, efectividad, suficiencia y congruencia; y (iii) la decisión que se adopte debe ser puesta en conocimiento del interesado con prontitud. A continuación, se hará una breve referencia a los elementos previamente mencionados”. (Negrillas fuera del texto).*

## **6.5. CASO CONCRETO**

Encuentra el Despacho que de acuerdo a lo manifestado por el señor JOHN ALBERTO HUMPHRIES BERRIO, presentó derecho de petición con fecha de 16 de junio de la presente anualidad, ante los señores JUAN CARLOS BONILLA DAVIS y JOANIS MCNISH MUÑOZ, directivos de CAJASAI, solicitando copia de las actas No. 03 y 04 de la Junta Directiva del año 2020.

Sostiene que los accionados no le han dado una respuesta respecto de su solicitud, razón por la cual considera vulnerado su derecho fundamental de petición.

En cuanto al derecho fundamental de petición, es claro que las autoridades y los particulares están obligados a resolver de fondo las peticiones interpuestas, es decir que deben brindar una respuesta que aborde de manera clara y detallada cada una de las inquietudes y/o solicitudes puestas en su conocimiento, lo anterior no implica nada diferente a resolver materialmente la petición.

La Jurisprudencia Constitucional ha indicado que una respuesta de fondo deber ser clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente.

Evidencia el Despacho que, en reiterada jurisprudencia la H. Corte Constitucional se ha referido al derecho de petición, precisando que el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas evasivas o elusivas.

En el caso bajo estudio, encuentra este Despacho que los accionados no han dado respuesta alguna al accionante en el presente tramite constitucional, por cuanto dentro de la misma contestación que dieron a este juzgado, de la acción de tutela de la referencia, se evidenció que están dando aplicación al Decreto 491 de 2020, que los faculta para responder peticiones en el término de veinte (20) días siguientes a la recepción de la solicitud hecha por el accionante.

En ese sentido, evidencia la suscrita que el día 16 de julio de 2020, era la fecha máxima que tenían los accionados para dar respuesta a la solicitud del accionante. Así pues, pese a que la acción de tutela fue interpuesta antes de que existiera la vulneración del derecho de petición, se observa que en el presente tramite dicho derecho ya se encuentra vulnerado, dado que los señores JUAN

CARLOS BONILLA DAVIS y JOANIS MCNISH MUÑOZ, aún no han hecho entrega de los documentos solicitados por el señor JOHN ALBERTO HUMPHRIES BERRIO; es así como el Despacho no tiene certeza de si resolvieron o no la petición del accionante de fecha 16 de junio de 2020.

De lo anterior, es menester nuevamente precisar que, la respuesta de fondo deber ser clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada.

Ahora bien, la respuesta a un derecho de petición, no siempre tiene que ser positiva, pero la misma, si debe resolver de fondo punto por punto, lo solicitado por el peticionario, así esto signifique una respuesta negativa.

Así las cosas, el Despacho tutelaré el derecho fundamental de petición invocado por el señor JOHN ALBERTO HUMPHRIES BERRIO, dado que no se tiene certeza alguna de que haya sido contestado su derecho de petición de fecha 16 de junio de 2020 y en consecuencia ordenará a los señores JUAN CARLOS BONILLA DAVIS Y JOANIS MCNISH MUÑOZ, para que dentro del término de 48 horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la presente acción, dé respuesta a la petición incoada por el accionante, haciendo entrega de los documentos solicitados, desde el día 16 de junio de 2020.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS ISLA**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la Ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: TUTELAR** el derecho fundamental de petición del señor **JOHN ALBERTO HUMPHRIES BERRIO**.

**SEGUNDO: ORDENAR** a **JUAN CARLOS BONILLA DAVIS Y JOANIS MCNISH MUÑOZ**, miembros de la junta directiva de CAJASAI, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo hubieren hecho, respondan en su totalidad y de fondo las inquietudes planteadas en el derecho de petición incoado por el señor **JOHN ALBERTO HUMPHRIES BERRIO**, haciendo entrega de los documentos solicitados por esta el día 16 de junio de 2020.

**TERCERO: ORDENAR** a los accionados que oficie con destino a este despacho el cumplimiento de lo ordenado en esta sentencia, aportando los soportes

pertinentes, teniendo como objeto el presente amparo constitucional, la protección del derecho fundamental de petición.

**CUARTO: PREVENIR** a **JUAN CARLOS BONILLA DAVIS Y JOANIS MCNISH MUÑOZ**, para que en lo sucesivo, evite la repetición de los actos omisivos, que dieron origen a la presente tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.

**QUINTO: NOTIFICAR** la presente sentencia en la forma ordenada en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

**SEXTO:** Contra la presente procede el recurso de impugnación

**SÉPTIMO:** Si este fallo no fuere impugnado oportunamente, envíese a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

**· NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**INGRID SOFÍA OLMOS MUNROE**  
**JUEZA**